

# Miguel Talento

## La larga marcha de la democracia: veinticinco años de continuidades y rupturas

### Miguel Talento

Abogado. Docente universitario y Embajador a cargo del Consulado de Miami, Estados Unidos de América

*"No siempre los países han definido con exactitud la democracia que desean, ni han calificado la democracia en la cual viven (...) El concepto de democracia pocas veces fue debidamente especificado con claridad suficiente para que el Pueblo supiese de qué se trataba"*  
(Juan Perón - "El Modelo Argentino", 1974)

### Introducción

Commemorar veinticinco años de continuidad democrática es una ocasión para celebrar y propicia para poner en perspectiva ese derrotero, caracterizar el ejercicio democrático de estos años tomando en cuenta los condicionamientos con los que emergió de la etapa dictatorial, sus límites y potencialidades así como los obstáculos más significativos que enfrenta cualquier continuidad democrática que pretenda garantizar un piso común de ciudadanía.

Pero esta celebración debe ser intelectualmente cuidadosa, porque la idea de continuidad puede resultar engañosa si por continuidad se entiende homogeneidad del funcionamiento democrático. Y no se trata de negar el valor de tal continuidad en un país en el que por primera vez se alcanza su funcionamiento ininterrumpido por ese lapso. Considero que es posible caracterizar el sistema político surgido en 1983 como el de una **"democracia condicionada"**, porque resultó determinado en forma decisiva por dos aspectos principales del accionar de la dictadura militar: el terrorismo de Estado y su plan económico. Estos aspectos produjeron un conjunto de factores limitantes de la voluntad nacional y del

sistema político que cercenaron su autonomía, limitaron las políticas públicas, estrecharon la libertad de los actores constituidos y legitimados en la arena democrática, recortaron los procesos decisivos en los marcos institucionales interfiriendo su funcionamiento, colonizando el aparato estatal, opacando las modalidades y las responsabilidades en la toma de decisiones y finalmente lograron establecer diversas formas de eludir las consecuencias legales de su accionar ilícito. Tales determinaciones establecieron las condiciones del ejercicio democrático en la etapa que se recorta entre 1983 y la crisis del 2001, al que he denominado **"primera transición democrática"**, para diferenciarla de la segunda etapa que tuvo su comienzo con las jornadas de diciembre de 2001.

Para fundar esta conceptualización será necesario analizar los procesos históricos que se encuentran en la base de la transición a la democracia surgida en 1983, partiendo de la idea de que la crisis de 2001 abrió un nuevo período al que es posible denominar **"segunda transición democrática"**. Y que esa ruptura contenía -y contiene-, potencialidades para la construcción de un sistema político más autónomo y capacidades para reorganizar la representación de las mayorías populares. Su punto de inicio consistió en la necesidad de restituir centralidad al sistema político en la sociedad nacional y por lo mismo, en hacerse cargo de remover los variados condicionamientos producto de la última dictadura militar.

La dictadura del Partido Militar iniciada en marzo de 1976 cayó por su aventurerismo irres-



ponsable, su falta de profesionalidad y sus atrocidades. Su fracaso en Malvinas abrió un proceso de transición sobre el cual los militares, aún derrotados y desprestigiados, conservaron capacidad de condicionamiento. Esa capacidad era consecuencia del proceso de brutal reversión de la correlación social de fuerzas, operada a través del baño de sangre desatado por la dictadura.

En otras palabras, la retirada militar de 1982/83 no fue precipitada por una estrategia de hostigamiento consistente del campo popular, expresada en una oposición movilizada con proyecto de gobierno, -como en 1973-, sino resultado de la situación insostenible que generó la derrota ante Inglaterra. La caída en el teatro operacional de Malvinas y los desaguisados políticos, militares y diplomáticos de la dictadura militar no suponían su derrota interna y tal situación le permitió al Partido Militar pactar y condicionar una larga transición hasta las elecciones generales de 1983.

La “**democracia condicionada**” que emerge en 1983 es un sistema político esterilizado en sus contenidos de integración y transformación social, toda vez que la dictadura terrorista había desarticulado, dispersado y desaparecido a los cuadros dirigentes e intelectuales de los sectores populares. Una gran novedad en 1983 fue que el peronismo, el gran antagonista popular, había mutado en lo sustancial: sin Perón, sin sus sectores combativos, sin el poder numérico de la clase obrera industrial, con su dirigencia mayoritariamente coludida con el partido militar, era un remedo fantasmal de aquel “hecho maldito del país burgués” que sólo atinaba a reproducir el folklore popular en sus movilizaciones pero podía ser desafiado y derrotado electoralmente. Y aunque se había vuelto inviable cualquier tutela militar sobre el sistema político, también se había tornado innecesaria.

El esquema de condicionamiento operante del ejercicio democrático, profundizado por el menemismo alcanzó su punto de estallido cuando la sociedad nacional advirtió que las esperanzas reformistas depositadas ingenuamente en el gobierno de la Alianza sólo producían frustración y bronca porque su naturaleza conservadora ratificaba todos los elementos que degradaban la

práctica democrática desde su restauración.

Su consecuencia fue la crisis del 2001, que habilita un punto de viraje en la dinámica emergente en 1983, abriendo la segunda etapa de la transición democrática, respuesta a la necesidad acuciante de enfrentar los límites impuestos al sistema democrático por la herencia dictatorial, y su supervivencia durante los gobiernos constitucionales que la aceptaron y profundizaron o que no pudieron modificarla y, de este modo, restituyendo la centralidad abdicada del sistema político en la vida nacional, reconstruyendo su autonomía y su equilibrio social, y dando inicio a la tarea de reorganizar la representación de las mayorías populares en el espacio democrático.

Este trabajo se organiza con la revisión de los elementos centrales del período que denominé primera transición democrática, y sus antecedentes históricos (la derrota popular y el triple condicionamiento impuesto por el programa de la dictadura militar). Luego se pasa revista a las vicisitudes del gobierno radical, al reforzamiento menemista del sistema de condiciones emergidas de los cambios producidos por la dictadura y la frustración colectiva del gobierno aliancista. Enseguida se aborda la segunda transición democrática y el programa implícito en las demandas de 2001 con el desarrollo de las políticas instrumentadas desde 2003, de suerte variada, destinadas a revertir los condicionamientos al juego democrático, para concluir revisando las posibilidades y obstáculos existentes para completar dicho tránsito, con vistas a un esquema que combine, con razonabilidad, el ejercicio democrático con un piso común de ciudadanía que haga reales los postulados de justicia social.

## I. La primera transición democrática

### La derrota popular y sus consecuencias

La evolución del peronismo, la principal identidad política de los sectores populares argentinos desde 1945, constituye el eje interpretativo en torno al cual, apreciar la movilización social que

se despliega de modos diversos a partir del derrocamiento de Perón en 1955, y que desemboca en la lucha política de los años '70. La proscripción del peronismo dio lugar a una democracia restringida y excluyente, esa república tutelada que luego del derrocamiento de Illia en 1966 se convertiría, lisa y llanamente, en el gobierno sin mediaciones de las Fuerzas Armadas devenidas en Partido Militar.

Esos años mostraron la configuración progresiva de un complejo y variado frente policlasista, compuesto por la base obrera sindicalizada que había nutrido la experiencia peronista original, a la que se fueron sumando importantes porciones de las capas medias que habían sido culturalmente refractarias a la experiencia del primer peronismo. La fuerza adquirida por este frente social, que se cristalizaba en la “fórmula política” de la vuelta de Perón, el fin de la proscripción y el retiro de los militares del gobierno, se volvió decisiva luego de 1969, manifestándose capilarmente en las fábricas, en los barrios más humildes, pero también en la universidad, entre grupos diversos y en instituciones que habían sido reductos inexpugnables de los sectores más conservadores de la sociedad.

La novedad histórica producida por la constitución de este frente nacional y popular catalizado políticamente por el peronismo, radicaba en *el acople potente entre la clase obrera industrial e importantes sectores dinámicos y modernos de las clases medias*. Articulación no exenta de contradicciones, pero lo suficientemente convocante como para dar por tierra con la obcecada resistencia de los sectores dominantes que, con el Partido Militar como expresión político-militar y dique de contención, impedían y violentaban la manifestación democrática de la sociedad, seguros de su derrota política en cuanto se produjese la apertura electoral.

La época favorecía la politización y movilización ideológica de los sectores medios. Tanto los cambios de perspectiva en el campo del cristianismo, - Concilio Vaticano Segundo, la Conferencia del CELAM en Medellín y los avances de la Teología de la Liberación en el mundo sacerdotal y de los laicos más comprometidos-, en las izquierdas y



en el nacionalismo, como el auge de las diversas manifestaciones críticas al orden bipolar de la Guerra Fría, a la sociedad de consumo alienada del capitalismo norteamericano y al autoritarismo brutal de la URSS, nutrían el imaginario antiimperialista que, amalgamado con el recuerdo plurisignificante de la experiencia peronista primigenia, producía esa exótica y poderosa experiencia de movilización que se reconocía como la "izquierda peronista".

En definitiva, *el auge y fracaso del frente policlasista que posibilitó el retorno y triunfo de Perón en 1973, constituye un fenómeno crucial de la historia argentina reciente*, ya que del fracaso político, la desmovilización, la destrucción de su ala izquierda y la impotencia de los sectores sindicales y políticos opuestos a la tendencia para defender el programa histórico del peronismo se producirían las condiciones generales para lo que algunos han llamado "la revancha de clase" que las capas tradicionalmente dominantes "se cobrarían" desde 1976 en adelante. Referirse a la frustración de ese frente implica, por lo menos, anotar dos puntos de importante significación histórica para el desarrollo posterior de los acontecimientos.

En primer lugar, es necesario dar cuenta -tarea aún pendiente en lo fundamental- de la inoportuna y miope radicalización política devenida en opción militarista de buena parte de la dirigencia de la izquierda peronista, equivocación histórica que debe ser debidamente anotada y reconocida, dado que implicó el abandono de la política, del debate y de la relación con las masas populares de las cuales se había nutrido y debía nutrirse para luchar por la hegemonía frente a los poderosos y mortales adversarios que enfrentaba, tanto dentro como fuera del movimiento peronista. Los errores y miserias desplegados desde la conducción de las organizaciones de la izquierda deben ser recogidos, analizados y tenidos en cuenta en sus núcleos conceptuales y en aquellos aspectos de la cultura política que puedan conservar vigencia en cualquier forma de ejercicio del poder, ya sea en ámbitos sociales o en espacios institucionales.

En segundo lugar, apuntar que la reacción pro-

ducida dentro del propio gobierno peronista a partir de la muerte de Perón, con la consolidación de sectores duros de la "derecha" peronista, se transformó en manifestación de impotencia e incapacidad de buena parte de su dirigencia "tradicional", tanto política como sindical, para mantener siquiera los principios más elementales de la experiencia originaria. Y esta perspectiva resulta más clara recordando las enormes movilizaciones sindicales de junio de 1975, de neta composición obrera y popular y casi sin influencia de la izquierda peronista, que mostraban la fuerza de la movilización popular, aún después de un año de comenzadas las acciones de terror blanco de las Tres A. En este punto, se requiere de un examen descarnado del rol de los diferentes actores del campo peronista, los sindicatos y la estructura política con sus tradicionales dirigentes y cuadros partidarios, que permita adquirir una perspectiva completa del transcurso de la crisis que desembocó en el golpe de Estado de 1976, sobre todo porque la versión peronista complementaria a la teoría de los dos demonios aduce que la radicalización de la izquierda peronista fue la causa excluyente del estrepitoso fracaso gubernamental, posterior a la muerte de Perón.

*¿Cuáles fueron las causas de la incapacidad global del peronismo por sostener como mínimo el programa originario de 1946-55? ¿Cómo puede explicarse la deserción general de su dirigencia ante la precipitación de los acontecimientos que desembocaron en las medidas económicas de Rodrigo, en las formas represivas ilegales y en el colapso final del gobierno de Isabel Perón?* Interrogarse por estas cuestiones guarda relación con el intento por comprender la génesis de la experiencia menemista de los años '90, tema que requiere poner sobre el tapete la labilidad ideológica y programática del peronismo, y la conversión de la tradición de "unidad de mando" en un mero "ordenamiento por y/o alrededor del poder", sobre todo luego de la desaparición de su fundador, haciendo posible un movimiento inerte frente a conducciones flagrantemente contradictorias con la representación objetiva de los sectores populares identificados histórica-

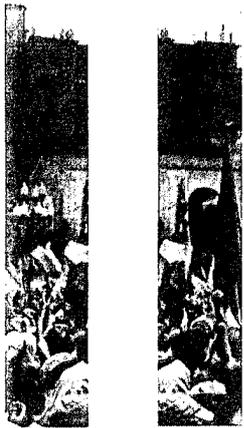
mente con él y con la experiencia gubernamental de diez años.

La "revancha de clase" que comenzaría a consumarse con el golpe del '76 implicaría el desguace definitivo del modelo de sociedad integrado, de relativa progresividad distributiva y posibilidades de ascenso social que, con el mercado interno como eje de su economía, se resistía a desaparecer desde hacía veinte años y resultaba, incluso, el punto de partida para concepciones más ambiciosas de estructuración social. La dictadura del Proceso liquidaría esa sociedad, inaugurando un modelo económico basado en la apertura externa, la valorización financiera del capital y el completo sometimiento del trabajo, por la vía de la caída del salario real.

La dictadura militar cumplió dos objetivos convergentes a la tarea global de descomponer aquella configuración que algunos han llamado la "Argentina imposible", la sociedad planteada por el peronismo en su experiencia original, "revolucionaria" según la misma interpretación, que había producido una inaceptable -para los sectores dominantes- movilización popular y un esquema productivo en el cual la alianza mercado internista participaba del ingreso nacional de modo significativo. En la política económica aplicada por el equipo liberal encabezado por Martínez de Hoz, emergió con claridad este propósito histórico. El impacto que ocasionó el programa de apertura financiera y comercial sobre el tejido productivo local debe ser ponderado a la luz del propósito disciplinador que perseguía el Proceso respecto de los sectores asalariados sindicalizados, que constituían la base dura de la coalición peronista.

Además, la radicalización política experimentada por amplios sectores de la sociedad argentina durante los años '60 y comienzos de los '70, fruto de la clausura del sistema político, de la brutalidad de las clases dominantes y del contexto internacional, debía ser eliminada de cuajo, para lo cual la violencia directa y terrorista aplicada desde el Estado resultó ser el método sistemático.

**No es necesario aquí analizar detalladamente las principales características, medidas, crímenes y despropósitos de la**



argentina reciente



**dictadura militar, sino remarcar que, a los efectos del período democrático iniciado en 1983, su legado fundamental consistió en decapitar material y políticamente a los sectores populares,** liquidando a los actores de la dirigencia sindical, estudiantil, intelectual y política que podían cumplir la función histórica de representar y conducir sus intereses. La democracia naciente, entonces, daba paso a una elite dirigencial -partidaria, empresarial y sindical- que en buena medida había coexistido y pactado con el Partido Militar, cúpulas de un sindicalismo burocratizado que a la muerte de Perón no había atravesado renovación alguna, un peronismo meramente pragmático, acomodaticio que avanzaba hacia la derrota electoral, y un empresariado concentrado que se había beneficiado de su política económica.

### Los límites del triple condicionamiento al juego democrático

En otros trabajos de esta colección he sugerido que la democracia de 1983 nació con un triple condicionamiento. Tres límites a la autonomía decisoria del poder político y de las instituciones democráticas, tres límites que resultaron ser, esencialmente, *obstáculos a la posibilidad de retomar programas de organización social tendientes a la generación de ciudadanía para aquellos sectores postergados*, sobre los cuales la experiencia del Proceso había sido especialmente dañosa. Reparar injusticias, producir un orden económico de crecimiento y distribución de la renta nacional, ordenar una política social inclusiva y generar mecanismos para la participación política democrática, parecían ser los ejes del programa difuso que se manifestaba como adhesión social masiva a la democracia naciente, luego de la negra noche de la dictadura militar. Sin embargo, *el peso del endeudamiento externo* habría de resultar un límite asfixiante para la autonomía nacional, en lo relativo a la capacidad de formular políticas económicas diferentes de aquellos programas establecidos por los organismos acreedores. La incapacidad de la política de la democracia para resolver este punto, agra-

vándolo inclusive durante la década de 1990, constituyó uno de los aspectos centrales de este cuarto de siglo democrático.

El segundo factor limitante de la autonomía política, está relacionado directamente con la cuestión del endeudamiento externo consolidado durante la dictadura. Consistió en el *binomio complementario entre un estado inerte o deliberadamente ausente y bobo, emasculado de su capacidad de intervención real en los procesos económicos, y en la presencia y consolidación de sectores económicos operando más allá de los límites de la legalidad vigente*, con una creciente capacidad para influir, por diversas vías, los procesos de decisión estatal, y de actuar sobre las crisis económicas del período, desde la lógica de la "normativa de emergencia", de la excepcionalidad, desde la fragilidad de las reglas de juego, procesadas naturalmente en su favor. Se ha señalado, en este sentido, que la presencia de esta clase de actores económicos con influencia creciente ha producido como *"consecuencia más palpable... la implementación de un modelo "rapaz" o "prebendario" de realización del capital, sin inversiones de riesgo y sin capacidad de generar integración social alguna, amen de la creciente posibilidad, por parte de estos sectores, de capturar rentas extraordinarias y monopolísticas"*.<sup>1</sup>

La implementación de programas económicos destinados casi exclusivamente a equilibrar las variables macroeconómicas, -a partir del Plan Austral de 1985-, crónicamente desestabilizadas en una economía estancada y endeudada, constituyó uno de los aspectos decisivos del bajo rendimiento democrático en lo relativo a su capacidad para mejorar la calidad de vida de la población. La relación entre cuestiones tales como "rendimiento de la democracia", "calidad de vida", "calidad de la ciudadanía" y "modelo económico", parece de utilidad para pensar el período de esta primera transición. **La incapacidad de los partidos políticos para generar (o regenerar) alianzas sociales capaces de enfrentar el creciente predominio de tales actores económico-financieros autonomizados, constituyó otro aspecto central de estos veinticinco años.**

En tercer lugar, la incapacidad e impotencia de la política en democracia para profundizar el camino de la justicia plena respecto del pasado militar, en lo relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura entre 1976 y 1983, (camino que había sido abierto con el juicio a las Juntas, que comenzó a obturarse con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que se intentó clausurar por completo con los indultos decididos en la década del '90), constituye el último de los factores de limitación a la soberanía decisoria.

*La mutilación infringida al Estado de Derecho, resultante de la sustracción sistemática de delitos y delincuentes de su órbita de jurisdicción y castigo*, resultaba una rémora insoluble, de alto impacto en el imaginario social al manifestarse como sentimiento de injusticia, o cuanto menos, de justicia parcializada. En este sentido, se ha sostenido que *"la capacidad de veto del actor militar, expresada durante el gobierno radical y coronada por los indultos menemistas, colocó el máximo condicionamiento posible a la existencia de una justicia plena en la nueva democracia"*.<sup>2</sup>

### Las dificultades del gobierno radical

Como se analiza en otros artículos y entrevistas de esta publicación, los militares aún derrotados y desprestigiados por el fracaso de Malvinas, por sus crímenes y por su accionar inoperante y muchas veces ilícito en la gestión, conservaron la capacidad de condicionar la transición, auto-arnistiándose y estableciendo pactos con sectores significativos de la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios.

La primera transición democrática estuvo marcada profundamente por la derrota del campo popular. El Partido Justicialista apareció en la campaña de 1983 conducido por la dirigencia que había resultado incapaz de mantener el programa mínimo del peronismo en 1975, y por los sectores burocráticos de un sindicalismo impresentable para las capas medias que, luego del baño de horror y sensibilizadas por la guerra de Malvinas, rechazaban las imágenes de violencia y folklore desorganizado que se les

ofrecía como espectáculo en derredor de la candidatura de Luder.

El radicalismo triunfante en 1983 se erigió en la expresión de los nuevos tiempos. Por un lado, interpretaba desde la "teoría de los dos demonios" el corrimiento masivo de los sectores medios, que adoptaban posiciones frente al pasado reciente que tendían a un repudio indiscriminado y acrítico de la "violencia política". Por otro lado, con la idea de democracia como un fin en sí mismo de la actividad política, naturalizaba el rol del partido en el sistema político argentino como fuerza defensora de este "bien" colectivo, mientras denunciaba a las "corporaciones" y al peronismo como factores antidemocráticos de un pasado que había que superar. Desde el punto de vista económico, el gobierno radical fue impotente para generar una alianza social capaz de superar las restricciones heredadas de la transformación procesista, y dotar de autonomía al Estado respecto de los condicionantes derivados del endeudamiento externo, a pesar de los intentos iniciales de Bernardo Grinspun. La concentración del capital que venía produciéndose desde la dictadura, por otra parte, se profundizaba en la década del '80, con la consolidación de grandes conglomerados oligopólicos que continuaban usufructuando del calor brindado por el Estado a través de los generosos regímenes de promoción industrial y/o proveyéndolo a precios y tarifas discrecionales. La imbricación de estos grupos económicos surgidos bajo la dictadura, beneficiarios principales del endeudamiento externo, con la dirigencia política de los dos grandes partidos tradicionales, su crecimiento en la década del '80, y su puesta en carrera para aprovechar las oportunidades que brindaría la década menemista, constituye uno de los rasgos centrales del período democrático inicial.<sup>3</sup> Además, la concentración del capital se profundizó bajo el gobierno de Alfonsín, por la vía de la caída casi constante del salario real.

La esterilidad política de las fórmulas intelectuales que nutrían al alfonsinismo de la época, cuyos íconos han venido a ser las ideas de Parque Norte y la pretensión de articular un "ter-

cer movimiento histórico", subordinando lo que erróneamente se percibía como un peronismo fenecido, se manifestaba en la incapacidad para sostener la política de juicio y castigo a los culpables del genocidio, y en la imposibilidad de articular poder social frente a un empresariado capaz de imponer condiciones generales de reproducción económica que doblegaban crecientemente la voluntad y los recursos políticos del gobierno. La gestión de Alfonsín quedó así atenazada frente a estos conglomerados, frente a la presión militar y frente a la creciente voluntad de movilización que adquiría la CGT, dado el constante deterioro de las condiciones de vida de los asalariados.

La democracia, tal como el alfonsinismo la había enarbolado, aparecía vaciada de contenido, como un conjunto de reglas de juego que no se aplicaba al mundo real de los poderes fácticos y, en ese sentido, semejaba cada vez más una sombra sin fuerza institucional para garantizar la vida y sus necesidades básicas (en contraste con la recordada frase de campaña que señalaba que con la democracia se educa, se come, se vive). Languideciendo, la cultura política de la militancia comenzaba a dar paso a la figura del "operador" político y a una profesionalización desmedida que no era sino la expresión de la cercanía en aumento entre cuadros partidarios y grupos económicos. La política, luego del Proceso militar, había dejado de ser la expresión -además de los intereses dominantes en cualquier sociedad capitalista- de sectores populares movilizados, para transformarse casi exclusivamente en actividad lucrativa de profesionales despojados de mandatos programáticos duraderos y vinculados a algún interés que no fuera el de la propia clase política -permanecer y gestionar en el poder- o de determinado conglomerado empresarial.

Esta tendencia de la época se manifestaba en los dos grandes partidos políticos, ya que la renovación peronista (acotada al reclamo de cambio metodológico en la elección de candidatos) no terminaba de concitar la movilización de su base social histórica, y si bien lograba presentarse como superación de los sectores más anquilosados e impresentables del movimiento, su

insuficiencia en términos de coherencia programática y consistencia militante quedaría de manifiesto en el triunfo menemista de 1988.

En general, la dirigencia política de la joven democracia se deslizaba, por impotencia o por complicidad, hacia la adopción de programas de gobierno que profundizaban el triple condicionamiento impuesto por la dictadura. Los años '80 estuvieron signados por **a) consolidar conglomerados económicos oligopólicos** que no sólo condicionaban la autoridad estatal para fijar políticas públicas autónomas, sino que se transformaban ellos mismos en usinas de dichas políticas, **b) incrementar la debilidad externa de la economía argentina**, tanto por la fuga de capitales como por la creciente presión de los acreedores externos, quienes a partir del '87/'88 redoblaban su presión por reformas estructurales y transferencias de activos públicos al sector privado y **c) instalar un contundente límite a la vigencia del Estado de Derecho**, ya que a partir de Semana Santa del '87 y las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se daba sanción a la impotencia política del sistema democrático para hacer justicia respecto de los peores crímenes y criminales de la historia argentina toda.

#### **El menemismo: un nuevo tipo de articulación de Política & Negocios**

Desde sus orígenes, el menemismo produjo una imbricación entre política y negocios que se transformó en piedra angular de la configuración de todo el sistema político. La articulación de nuevo tipo que supuso el menemismo incluyó una participación sustancial en la transferencia de los activos estatales -a diferencia del tradicional mecanismo de las comisiones en negocios diversos, entre ellos las inversiones extranjeras- el soporte principal en el financiamiento de las campañas políticas, instalación de candidatos, promoción de figuras mediáticas y el reciclamiento de los fondos adquiridos por tales operatorias en negocios legales. La aplicación del modelo que perfeccionara Salinas de Gortari en México con la pretensión de estar fundando un

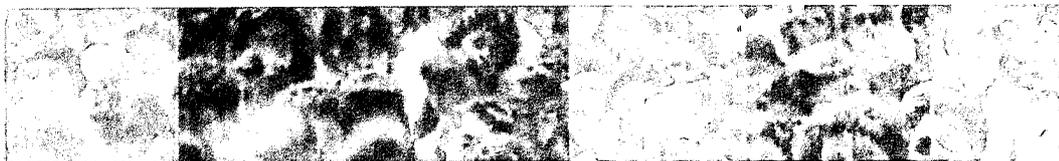
liberalismo social, de nuevo cuño, cuya única novedad era el grado de audacia en la apropiación de activos públicos sobre sociedades desarticuladas por el terror, los golpes de mercado, las campañas mediáticas y la defección de la mayor parte de las dirigencias de los partidos de origen popular, que aceptaban sin resistencia la mutación de sus programas por los contenidos neoliberales.

Lo fundamental de esta nueva relación era el descentramiento de la política como espacio de discusión del interés general, para convertirlo en un espacio exclusivo de gestión de intereses económicos sectoriales con una enorme despreocupación por la legitimación de tal forma de gobierno que se conformaba con el taparrabos ideológico de apelaciones a la novedad de un mundo unipolar, a la celebración del triunfo universal del capitalismo en clave del fin de la historia y a la utilización del folklore histórico de las manifestaciones populares como ornato de una desnaturalización inaudita de sus intereses y sus derechos. *En este contexto, la corrupción pasó de ser un fenómeno siempre presente en los márgenes de toda democracia liberal capitalista, controlable y discernible como problema judicial, a transformarse en el cemento, en el lazo orgánico de buena parte de la arquitectura política argentina.* Y no se trataba simplemente del hecho de que los grupos económicos locales y externos que venían a intervenir en el proceso de desguace del aparato estatal sobornasen a determinados funcionarios y dirigentes para desarrollar sus negocios -como se dijo-, sino que el financiamiento de la política como actividad dependiese fundamentalmente de estos recursos, y de que la propia dirigencia política se transformase en empresaria, reinvertiendo los recursos mal habidos en negocios comunes con sus nuevos socios del ámbito privado. El control del aparato estatal será utilizado como fuente de negocios para la dirigencia, dado que las decisiones políticas y administrativas se transforman fundamentalmente en "bienes" negociables, siempre desde una posición de subordinación, con el poder privado.

**De este modo, los '90 consolidaron una nueva cultura política que abandonaba**

**cualquier pretensión de autonomía respecto del poder económico y que no sólo se sometía a los programas e intereses de sus gurúes, sino que procuraba asociarse a sus negocios.** El neoliberalismo y la ideología de la globalización eran sus expresiones intelectuales, más o menos elegantemente formuladas por los epigonos locales del Consenso de Washington.

Desde el punto de vista del triple condicionamiento a la autonomía política de una democracia plena, la década menemista alcanzó el paroxismo de la subordinación. La voluntad política perdió toda centralidad, sometida desde el vamos al discurso pretendidamente "técnico" de la economía neoliberal. El proceso de enajenación del patrimonio público, transfiriéndole activos a los acreedores externos y a sus socios locales, avanzó sin mayores dificultades, dada la ausencia de resistencias significativas en el propio peronismo o en el resto del sistema de partidos y el grueso de la dirigencia sindical. La labilidad organizativa, ideológica e institucional del peronismo se manifestaba en la enorme indefensión frente al giro menemista, que no sólo consumaba la etapa final del programa procesista, sino que, a la luz de la historia posterior a la muerte de Perón, debe a estas alturas ser interpretada como el rasgo más saliente de su configuración. Poco fructífero resulta interpretar, como se lo ha hecho reiteradamente, a los gobiernos de Menem como una "traición" a los valores y posiciones originales del peronismo. Por supuesto que en términos de la defensa y promoción de los intereses populares, de la distribución justa del ingreso y de la integración social, la etapa menemista se ubica objetivamente en las antípodas de las experiencias de los anteriores gobiernos peronistas. Sin embargo, la idea de "traición" desdibuja el hecho de que el grueso de la dirigencia del Partido Justicialista tendió a acompañar -silenciosa o entusiastamente es una cuestión de grado-, el rumbo neoliberal de Menem: el peronismo se alineaba simplemente por el poder y el pragmatismo, aunque ese posicionamiento significara una reversión completa del programa popular del primer peronismo.



Los indultos consumaban la política de la Obediencia Debida y el Punto Final, y con ello, la incapacidad de desarrollar un sistema político basado en la justicia y la memoria histórica. En conjunto, recubiertos por el discurso de la "pacificación nacional", venían a consumir el reconocimiento de la dirigencia democrática de que la única forma de someter los militares a la Constitución se vinculaba con los acuerdos de cúpula y con el abandono de cualquier pretensión de reconstrucción de una movilización popular basada en la justicia plena.

En el plano económico, la década menemista consumó una nueva escalada en el proceso de dislocamiento del tejido productivo nacional y agudización de la dependencia externa, agravando el endeudamiento hasta niveles insólitos. El capitalismo de valorización financiera, cuyas bases había instalado la gestión de Martínez de Hoz, tenía su corolario mientras los sectores populares eran disciplinados ya no por el terror de las armas sino por el terror del desempleo, que abarataba la mano de obra y permitía niveles de concentración de capital aún mayores.

### **Las terceras fuerzas y la experiencia de la Alianza**

En este punto, además del formato bipartidista del presidencialismo argentino, merece una reflexión el derrotero de las terceras fuerzas políticas que se desarrollaron en las décadas del '80 y '90, a derecha y a izquierda de los partidos mayoritarios, ya que si bien sufrieron el común destino de disolverse en coaliciones encabezadas por el peronismo y el radicalismo, siendo sus dirigentes asimilados en los distintos elencos de gobierno, distinta fue su suerte en cuanto a la realización de los programas que enarbolaban cada una de ellas, en sus respectivas fases de crecimiento político.

Por un lado, el liberalismo vernáculo consiguió, a través de la UCeDé de fines de los '80 y principios de los '90, una fuerza partidaria con un caudal electoral inédito para la derecha argentina, pocos años antes de encontrar en el menemismo el vector adecuado para impulsar su recetario tra-

dicional. De este modo, el formato bipartidista tenía un afluente "por derecha", que sumaba cuadros y realizaba los elementos sustanciales de su programa -desregulación y apertura de la economía, privatizaciones y achicamiento del Estado, encuadramiento en el "Primer Mundo", a partir de una política exterior de alineamiento automático y acrílico con los Estados Unidos.

Por otro lado, del único desgajamiento significativo que sufrió el oficialismo en los primeros años de la presidencia de Menem, el grupo de los ocho diputados que integraba -entre otros legisladores de extracción peronista- el prematuramente malogrado Germán Abdala, iría configurándose un complejo e intrincado frente de partidos y grupos de centroizquierda que daría lugar primero al Frente Grande y luego al FREPASO. Resulta necesario, para realizar un balance adecuado de esta experiencia recordar debidamente los orígenes programáticos del Grupo de los 8, sus posiciones respecto del giro neoliberal del menemismo, y acentuar con claridad que tales posiciones no se limitaban a señalar la corrupción desde un costado meramente ético o judicial, sino que reivindicaban la necesidad de desarrollar un modelo económico y político de autonomía nacional, distribución justa del ingreso e integración social de los sectores populares a la vida del país.<sup>4</sup>

Segunda fuerza en las elecciones presidenciales de 1995, el FREPASO concretaría a partir de 1997 la Alianza con el radicalismo, produciéndose un conjunto de efectos que profundizarían, en el largo plazo, la impotencia del sistema político por encontrar alternativas a los condicionantes que cercenaban el rendimiento y la legitimidad democrática. En primer lugar, un remozamiento de la Unión Cívica Radical que sería aprovechado por los sectores más conservadores de dicha fuerza. Debe recordarse que luego del Pacto de Olivos, el radicalismo caía al 15% de los votos en las presidenciales del '95, esto es, el mínimo electoral de su larga historia. La Alianza, en este sentido, venía a rescatar a la U.C.R. de su desdibujado perfil opositor al menemismo ya que ahora el radicalismo se nutría de las credenciales de la nueva fuerza política que había crecido jus-

tamente desde ese lugar cuestionador. En segundo lugar, una disolución cada vez más pronunciada de los contenidos potencialmente transformadores del FREPASO en lo atinente a la política económica, al rol del Estado y las posiciones de política exterior. Conforme la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires en 1997 y el desgaste del menemismo en el contexto del ciclo recesivo que comenzaba por aquellos años, permitían avizorar chances ciertas para el recambio presidencial, la moderación del discurso de esta tercera fuerza se hizo más notable, hasta abandonar definitivamente todo matiz crítico tanto al plan de convertibilidad como al proceso de privatizaciones y desguace del Estado que había tenido lugar bajo los gobiernos de Menem. En tercer lugar, la completa resignación a configurar una organización política duradera más allá de las figuras mediáticas que habían concitado adhesiones electorales en el período '93-'97. La derrota en la interna que consagró a De la Rúa candidato presidencial de la Alianza, licuó al FREPASO como posible expresión alternativa a los consensos dominantes en las elites políticas de la democracia condicionada, con capacidad de desarrollar alguna clase de vinculación orgánica con los sectores populares.

La década menemista se cerraba entonces con un recambio que no cuestionaba más que aspectos laterales del modelo institucional y económico de los años '90. Debe recordarse, en este sentido, que la candidatura presidencial del Partido Justicialista, expresaba en la campaña de 1999 más desacuerdos con el modelo económico de la convertibilidad que la Alianza "opositora", que se manifestaba menos proclive a cuestionarlo conforme su victoria electoral se acercaba.

### **La breve y frustrante experiencia de la Alianza aceleró la crisis del modelo de democracia condicionada surgido en 1983.**

El agolpamiento de diversos tipos de crisis en una crisis de legitimidad global arrastró al gobierno de De la Rúa en unos pocos meses. Ninguno de los elementos que venían impidiendo un desempeño político autónomo de los intereses dominantes fue encarado seriamente por la experiencia aliancista, sino que se eligió el camino



de la profundización de un modelo de país injusto y que, además, venía agotándose desde que la situación internacional de mediados de los '90 volvía a la convertibilidad un corsé insoportable.

Además, volviendo aún más dramática y espectacular la pérdida de legitimidad general del sistema político, se manifestaba y volvía transparente como nunca antes la vinculación entre política y negocios, a partir del obscuro episodio de la aprobación de la ley de flexibilización laboral por vía de sobornos a parlamentarios, orquestados desde la cima del poder ejecutivo nacional. Por si fuera poco, la instrumentación del episodio se realizaba a través de un ministro que ocupaba su cargo a propuesta del componente de la alianza de gobierno que había hecho de la transparencia y la lucha contra la corrupción, la principal de sus banderas de lucha, hasta ese momento, inauditable. Este incidente, en el contexto de la crisis económica, no sólo daba por tierra con la Alianza U.C.R.-FREPASO, sino que iluminaba significativamente aspectos ominosos del funcionamiento del sistema político que se percibían socialmente desde tiempo atrás.

## II. La Segunda Transición democrática

### **El impulso hacia un programa de ruptura de los condicionamientos.**

#### **El rol del kirchnerismo.**

La crisis de diciembre de 2001 puede ser entendida, finalmente, como el punto máximo de deslegitimación del sistema político surgido en 1983, producido por el desgaste que los distintos elementos condicionantes de la autonomía democrática venían acumulando sin solución a través de los distintos gobiernos constitucionales.

**La percepción social de "falta de alternativas", de descrédito de una dirigencia política que había defecionado del resguardo del interés general y aparecía inexcusablemente aliada y socia del poder económico, de ausencia y desamparo institucional, de corrupción generalizada, se coagulaba en el rechazo anónimo del "que se vayan todos".**

La ineptitud de las alternativas partidarias para

cubrir las expectativas sociales de renovación y reorientación del sistema político resulta uno de los aspectos a tener en cuenta en el análisis de la crisis. La rápida frustración de la Alianza, que tenía como diferencial electoral sus promesas de cambio, debe ser entendida como la forma política específica que tuvo el estallido con el que finalizó la primera etapa de la transición democrática. El derrumbe sobrevino cuando quedó expuesta su incapacidad para actuar contra esos limitantes estructurales, y por lo mismo impotente para cumplir las expectativas sociales de mayor equidad y justicia, en un escenario en el que casi la mitad de la población se encontraba ya bajo la línea de pobreza, con tasas de desempleo combinadas superiores al 30%.

**La posibilidad de dar significado político a esa percepción social, de otorgarle un sentido superador a la bronca y a la sensación de frustración social, es lo nuevo que ha estado en juego desde diciembre de 2001.**

He intentado graficar la hondura de esa vacancia política con la idea de un "programa no escrito", vinculado a la necesidad de remover los condicionantes estructurales al funcionamiento del sistema político democrático que se encontraban presentes desde los días nefastos de la dictadura militar y que no se pudo, no se supo o no se quiso modificar hasta la crisis de diciembre de 2001.

Se ha sostenido que los años transcurridos desde la crisis de 2001 y en especial a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 hasta la actualidad, constituyen un cambio de tendencia respecto de los parámetros de desenvolvimiento del sistema democrático que han sido descritos en este artículo. En este sentido he utilizado la expresión "**segunda transición democrática**", para dar cuenta de un conjunto de elementos de cambio, que apuntan de manera directa a la remoción de los tres condicionantes que caracterizaron al período 1983-2001 y que dan visibilidad precisa a la marcha en un rumbo diferente.<sup>5</sup>

*En primer lugar, se ha recuperado la capacidad estatal para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que supone un Estado de Derecho sin vetos ni límites en su ejercicio legal.*

La remoción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la reactivación de las causas judi-

ciales por los delitos del terrorismo de Estado, permitieron eliminar un límite repugnante para la integridad democrática. La política de derechos humanos basada en las premisas de Memoria, Verdad y Justicia, ha constituido un avance significativo en el camino de sacudir uno de los condicionamientos más ominosos sobre el juego democrático argentino. Las restituciones simbólicas a la memoria de las miles de víctimas del terrorismo de Estado, plasmadas en multitud de gestos, sin espíritu de revancha, con ánimo de justicia y con la voluntad de construir una democracia de todos sin impunidad frente tales latrocinios ha sido una contribución de valor. Frente a la magnitud de la tarea realizada en este campo las operaciones propagandísticas de los grupos vinculados ideológicamente a la dictadura terrorista,<sup>6</sup> resultan un desafío marginal. Lo que no resulta marginal y requiere atención y respuestas eficaces de la justicia y de los organismos de seguridad del Estado, son las operaciones de provocación de los pequeños grupos operativos procesistas remanentes que han marcado con la desaparición de Julio López, testigo calificado en la causa Camps, una osadía aún impune.

Una justicia funcionando sin cortapisas, el juicio y castigo a los criminales más atroces de nuestra historia, debiera volverse extensiva a los grandes delincuentes económicos, a quienes utilizan su pertenencia a las fuerzas de seguridad para violar la ley, a todos aquellos, en definitiva, que siguen sintiéndose impunes en la sociedad argentina. No existe sociedad avanzada e integrada que no cuente con un sistema razonablemente eficaz e independiente de justicia, con un sistema de premios y castigos verosímil para el conjunto de la ciudadanía, esto es, que pueda ser reconocido como legítimo. Se ha avanzado ejemplarmente con la remoción de los integrantes de la Corte Suprema vergonzante que posibilitó la asociación entre política y negocios de los '90 -a la vez que fue su producto-, pero aún falta mucho por recorrer en lo atinente a transparentar, mejorar y dinamizar el funcionamiento de la Justicia argentina.

*En segundo lugar, en lo relativo a los condicionamientos nacionales e internacionales surgidos del endeudamiento, se han dado pasos decisivos para reducir o cancelar la exposición a tales presiones avanzando en la reversión de la relación*



*de subordinación sistemática de la capacidad de decisión nacional a los imperativos supuestamente "técnicos" del discurso dominante hasta hace no pocos años.*

Este es uno de los aspectos más significativos de la etapa abierta en mayo de 2003 y tiene sus hitos principales en la renegociación de la deuda soberana y en la cancelación de la deuda con el FMI. La reprogramación de la deuda emitida por el Estado nacional se realizó sobre bases inéditas para los casos de default nacionales y con buen suceso, toda vez que se logró que el 75% de los tenedores de bonos argentinos aceptara la reprogramación de sus acreencias, quedando abierta la cuestión de aquellos que resistieron tal reorganización.

En relación a la deuda con organismos internacionales de créditos, en especial con el Fondo Monetario Internacional, el esfuerzo por cancelar la deuda contraída, haciendo uso de las reservas acumuladas en virtud de los superávits gemelos, no sólo significó un paso adelante en el desendeudamiento del Estado sino también y en lo fundamental, reforzar la autonomía en el manejo de las herramientas de política económica, toda vez que este organismo funcionó como custodio en última instancia de las políticas de subordinación de los intereses nacionales a los grandes intereses corporativos y a la limitación y reducción de la capacidad regulatoria estatal.

Entablar la relación con los acreedores externos desde posiciones de autoridad política, achicar la vulnerabilidad fiscal y desendeudar al Estado argentino, son elementos centrales de una política para sacudirse la impotencia y los límites de la primer transición en la que estos aspectos o no fueron pensados ni posibles, o no fueron intentados de modo consistente.

*En tercer lugar, se ha avanzado con fuerza en la reconstrucción de la rectoría del Estado en el ordenamiento socioeconómico rescatando instrumentos de política económica que permiten una recomposición de capacidades regulatorias, de equilibrio e intervención sobre los mercados. Un sistema político democrático puede y debe debatir públicamente sobre la relación entre Estado y mercado con todas sus consecuencias, respecto de los horizontes deseables de integra-*

ción social, las pautas de distribución del ingreso, las perspectivas generales y estratégicas del desarrollo nacional y las modalidades de inserción y alianza regional e internacional.

Y tal debate lo debe hacer con los actores económicos y sociales, en particular con las fuerzas representativas de los sectores sociales que llevan la peor parte en una sociedad capitalista. En este sentido ha resultado importante la reversión en el imaginario colectivo, en el sentido común, de las naturalizaciones neoliberales de la década de 1990 que constituían al mercado como actor exclusivo y encerraban al Estado en un rol pasivo. Entre 2003 y 2008 el Estado argentino ha recuperado instrumentos para desplegar su actividad estratégica en la vida social, instrumentos que el proceso de desguace había enajenado y desarticulado. Por caso, intervenir en los decisivos mercados de servicios públicos, disciplinando a los actores privados ante la falta de prestaciones adecuadas, de tarifas justas o de desarrollo de los planes de inversión comprometidos, resulta una de las prerrogativas estatales centrales para cualquier nación con futuro. Algunas intervenciones e iniciativas concretas de estos últimos años constituyen avances inéditos, desde 1983 a esta parte, respecto de la construcción de un Estado autónomo frente a los intereses privados: las reestatizaciones de empresas que no cumplían los estándares mínimos de inversión y desarrollo estratégico, o cuya gestión resultaba insuficiente o incompatible con horizontes de bienestar colectivo en el largo plazo. Clausurar el impacto negativo en las finanzas públicas producido por la privatización de los fondos jubilatorios obligatorios y protegerlos de los abusos cometidos por años en el cobro de comisiones exorbitantes y el manejo discrecional de las sumas confiadas, ha implicado otro escalón en la reconstrucción de la autonomía estatal. Falla avanzar en este sentido si pensamos en el estado del transporte público o en el desarrollo de un sistema energético nacional sustentable, pero es indudable la reversión de la errónea idea de que el mercado es soberano y suficiente por sí mismo para garantizar el desarrollo de una sociedad moderna, madura e integrada.

Las intervenciones públicas se han resuelto hasta aquí con diferente tipo y formato. El modelo que vaya a elegirse en cada caso y la capacidad de generar en la opinión pública el conjunto de representaciones que aúne la transparencia con el sentido político e ideológico correcto, potenciarán la etapa de superación definitiva de la postración estatal, que no hizo sino ahondarse en la democracia condicionada.

Las fuerzas opuestas a este curso todavía no consolidado de autonomía estatal se encuentran prestas y hábiles por explotar, a través de los dispositivos de difusión que confrojan de modo concentrado, cualquier fallo o debilidad en las propuestas, potenciando sospechas de corrupción, de asociación con intereses "amigos", o de búsqueda de beneficios partidarios.

*Preservar y potenciar este proceso histórico de reversión del predominio neoliberal es la tarea histórica que debe anteponerse con grandeza a cualquier otro interés y para la cual, más allá errores y desvíos, se han colocado sus bases fundamentales en estos últimos cinco años, bases que hasta las miradas más críticas no debieran soslayar, sobre todo si se las coloca en la perspectiva de la impotente etapa del sistema condicionado de 1983-2001.*

### **Obstáculos y desafíos para la continuidad de la segunda transición**

A poco de producidas las elecciones presidenciales de octubre de 2007, sosteníamos desde estas páginas que *"si se comparte el diagnóstico de que existen interesantes y amplios sectores de clases medias, intelectualizados y culturalmente pluralistas, proclives a entender y a participar de un proceso de construcción de una alianza social popular que sustente un programa de distribución del ingreso, de reforma progresiva del capitalismo, de defensa de los valores ecológicos, de protección de las minorías étnicas, de extensión de derechos efectivos de ciudadanía a los sectores más postergados de la sociedad, y en definitiva, de solidaridad con los proyectos emancipatorios del resto del continente, este desafío debiera ser acuciante. No existe ningún determi-*



nismo en torno al famoso latiguillo de que las clases medias educadas no acompañan al peronismo, como lo demuestra sobre todo la experiencia de movilización social de los años '60 y '70. Un frente social y político lúcidamente articulado sobre la base de organizaciones vertebradas, democráticas y pluralistas debiera ser ampliamente capaz de modular la base popular peronista con otros apoyos sociales. **El kirchnerismo representa una plataforma inigualablemente posicionada para realizar este proyecto, si despliega la voluntad necesaria**".

El sistema político argentino no ha superado la labilidad organizativa ni ideológica que lo caracterizara desde hace tanto tiempo y, como se sabe esos rasgos juegan siempre a favor de las tendencias conservadoras que existen en toda sociedad. Son los sectores más débiles, los que llevan la peor parte en la estructuración social, los que requieren de organización, coherencia y claridad ideológica y programática, medios de comunicación y difusión propios, sistemas de educación política y formación de cuadros dirigentes, etcétera.

En este sentido, una democracia liberada de condicionamientos inaceptables para su ejercicio y madura, requiere de partidos políticos organizados, coherentes y comprometidos con sus pro-

gramas. Y se está con seguridad ante una oportunidad histórica de construir colectivamente un sistema democrático que repose en una aceptable consideración de la cuestión social, estableciendo un piso de ciudadanía que permita niveles de integración, justicia social y razonable distribución de la riqueza.

Sin embargo a lo largo de este año, y sobre todo a partir del conflicto por las retenciones móviles, se han acentuado algunas tendencias preocupantes en el liderazgo opositor y en algunos medios periodísticos que en un ejercicio de vanguardismo que envidiarían algunas viejas corrientes de izquierda conducen e intentan radicalizar una opinión pública sensibilizada con artículos e incitaciones visceralmente antigubernamentales.

Hay peligro que se profundicen estrategias irresponsables que trastornen el clima de convivencia democrática, crispándola y que le otorguen protagonismo a tendencias radicalizantes de distinta proveniencia que operan sin preocupación por la conservación del clima y de los modales democráticos mínimos.

El "clima destituyente",<sup>7</sup> patente en los días más álgidos de la confrontación con los sectores agropecuarios, no estuvo exento de fantasías insurreccionales articuladas al desabastecimiento forzado de las grandes ciudades, con masivo apoyo mediático. Una derecha sin partido, pero

con un eficiente estado mayor libró con inusitada eficacia la crucial batalla mediática por la caracterización de la protesta y la construcción de los relatos principales sobre la misma.

El mérito político de la serenidad gubernamental ante tales desafíos muestra que se ha sido capaz de aprender de la historia de las tragedias nacionales, con la lucidez de quienes han sido víctimas en los momentos represivos y la mayor responsabilidad por detentar el gobierno. La elección de la arena parlamentaria para dirimir la suerte final del conflicto y el acatamiento a rajatabla de su resultado constituyeron un aporte al ejercicio democrático y a la concordia institucional.

Ante las dificultades de la hora es bueno reafirmar el programa popular avanzando en la configuración de una alianza social progresista, con eje en el peronismo, sobre la base de un programa explícito y de una convocatoria amplia y generosa, que articule a los sectores populares con las capas medias imprescindibles para lograr una sociedad más justa, imponiendo reglas de juego al mercado y a los más poderosos actores de la economía a través de un Estado con plena capacidad regulatoria. **Esta tarea urge y pese a todo lo hecho, todavía se encuentra inconclusa.**

## Notas

1 Talento, Miguel: *El 2001 en perspectiva histórica*. En *Cuadernos Argentina Reciente*, N°3, Diciembre de 2006.

2 Ídem.

3 La descripción detallada de este proceso se encuentra en los excelentes y ya clásicos trabajos de Aspiazú, Khavisse y Basualdo: *El nuevo poder económico*. Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1988 y de Basualdo, Eduardo: *Sistema político y modelo de acumulación*. UNQUI Ediciones, 2001.

4 Creemos útil recomendar, para las nuevas generaciones, la lectura de los conocidos textos y documentos fundacionales del Grupo de los 8. Nos referimos a *La carpa de Alí Babá*, Legasa, Buenos Aires 1991 y a *La traición de Alí Babá*, Baires Edita, Buenos Aires 1991.

Por otro lado, la lectura de la Revista *Unidos* resulta fundamental para apreciar y reconstruir las posiciones intelectuales y políticas de una experiencia militante que, reivindicando gran parte de los tópicos y posiciones de la izquierda peronista, recorría el camino de la Renovación en los años '80 y denunciaba al menemismo en los tempranos '90. Cotejar esas posiciones con aquellas asumidas por una porción significativa de los cuadros dirigentes de esta corriente durante la experiencia de la Alianza con el radicalismo, y especialmente bajo el gobierno conservador de De la Rúa sigue siendo un ejercicio de debate y reflexión no debidamente realizado todavía.

5 La construcción kirchnerista de la legitimidad de

ejercicio, luego de la asunción el 25 de mayo de 2003 con el 22% del electorado por la deliberada deserción menemista, se basó en la comprensión profunda de ese programa y de la necesidad que expresaba y en la decisión de poner en marcha medidas que avanzaran en la remoción de los condicionamiento dictatoriales ya descritos.

6 También han manifestado sus críticas a la política de derechos humanos algunas voces que claman por una memoria completa, tributarias de la teoría de los dos demonios, buscando una homologación imposible desde lo fáctico, lo ético y lo jurídico entre el terrorismo de Estado y la violencia guerrillera.

7 Aguda observación acuñada por los redactores de *Carta Abierta*.